

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

10070 *ORDEN de 29 de marzo de 1993 por la que se dispone la publicación, para general conocimiento y cumplimiento del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 1.118/1990, promovido por doña Catalina Cano Sarabia y otras.*

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 18 de diciembre de 1992, en el recurso contencioso-administrativo número 1.118/1990, en el que son partes, de una, como demandantes, doña Catalina Cano Sarabia y otras, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra Resoluciones del Ministerio para las Administraciones Públicas de diversas fechas, que desestimaban los recursos de reposición interpuestos contra Resoluciones de la Dirección General de la Función Pública de diversas fechas, sobre retroactividad en integración en la Escala Administrativa de Organismos Autónomos.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador señor Rueda Bautista, en representación de doña Catalina Cano Sarabia, doña Norberta Carrasco Sánchez, doña Concepción Sánchez Guerrero Fuentes, doña Juana Clares Sevilla, doña Teresa Ros López, doña Juana Porlan Rubio, doña Pilar Pérez Pérez y doña Pilar Melgarejo Marín, contra las Resoluciones de la Dirección General de la Función Pública del Ministerio para las Administraciones Públicas, de fechas 27 de marzo y 16 de abril de 1990, desestimatorias del recurso de reposición deducido por las actoras frente a las Resoluciones del mismo órgano que denegaron sus peticiones tendientes a que la fecha de efectos de sus respectivas integraciones en la Escala Administrativa de Organismos Autónomos se retrotrajera al momento en que cumplieron los requisitos previstos en la disposición transitoria del Decreto 3476/1974, debemos declarar y declaramos las mencionadas Resoluciones ajustadas a Derecho, sin hacer especial imposición de las costas procesales causadas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 29 de marzo de 1993.—P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó García.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Función Pública.

10071 *ORDEN de 29 de marzo de 1993 por la que se dispone la publicación para general conocimiento y cumplimiento del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo 319.328, promovido por don Francisco Segura Blasco.*

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia, con fecha 30 de octubre de 1992, en el recurso contencioso-administrativo número 319.328, en el que son partes, de una, como demandante, don Francisco Segura Blasco, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la resolución presentada del Ministerio para las Administraciones Públicas que desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la resolución de la Inspección General de Servicios de la Administración Pública, de fecha 6 de octubre de 1987, sobre compatibilidad.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Letrado don Ricardo Lorenzo Montero, en nombre y representación de don Francisco Segura Blasco, contra la desestimación presentada por silencio administrativo del recurso de reposición promovido frente a la resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de 6 de octubre de 1987, debemos declarar y declaramos que las resoluciones impugnadas son conformes a derecho; sin hacer expresa imposición de costas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 29 de marzo de 1993.—El Ministro para las Administraciones Públicas, P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó García.

Ilmos Sres. Subsecretario y Director general de la Inspección General de Servicios de la Administración Pública.

10072 *ORDEN de 29 de marzo de 1993 por la que se dispone, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el recurso contencioso-administrativo 263/1991, promovido por doña Josefa Jiménez Bernalte.*

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha dictado sentencia, con fecha 25 de enero de 1993, en el recurso contencioso-administrativo número 263/1991, en el que son partes, de una, como demandante, doña Josefa Jiménez Bernalte, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de fecha 4 de marzo de 1991, que desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 22 de noviembre de 1990, sobre abono de beca de residencia.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Que estimando el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don Juan Antonio Hernández Lavado y representación de doña Josefa Jiménez Bernalte, contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas desestimatoria de la alzada formulada en impugnación de lo dictado el 22 de noviembre de 1990 por la Dirección del Servicio Provincial en Cáceres de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, que le denegó el abono de la beca de residencia concedida a su hija María José Gómez Jiménez, debemos declarar y declaramos la nulidad de los actos administrativos impugnados por no ser conformes a Derecho, y en su lugar reconocemos a la recurrente el derecho a que se le abone por la citada Mutualidad General los gastos derivados de la estancia de su hija María José en la Residencia del Sagrado Corazón de Jesús, en Badajoz, durante el curso académico 1990-91, en cuantía igual al coste de la plaza en Centro dependiente de la Mutualidad. No hacemos especial pronunciamiento en cuanto al pago de las costas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín